

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DICCIONARIO

HISTÓRICO JUDICIAL
DE MÉXICO

Ideas e Instituciones

TOMO III

P-Z

Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Catalogación

PO

C

A300

D522.3d

Diccionario histórico judicial de México : ideas e instituciones / [obra a cargo de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos ; presentación Ministro Sergio A. Valls Hernández, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia ; nota preliminar Salvador Cárdenas Gutiérrez ; colaboradores Abelardo Levaggi ... [et al.]]. -- México : Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2010.
3 v. ; 24 cm.

Contenido. t. 1. A-F -- t. 2. G-O -- t.3. P-Z

ISBN 978-607-468-273-1 (Obra completa)

ISBN 978-607-468-276-2 (Tomo III)

1. Derecho -- Historia -- Diccionarios. 2. Lexicología jurídica I. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos II. Valls Hernández, Sergio Armando, 1941- , prol. III. Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, 1959- , prol. IV Ortiz Mayagoitia, Guillermo Iberio, 1941- , prol. V. Cárdenas Gutiérrez, Salvador, prol. VI. Levaggi, Abelardo, colab.

Primera edición: noviembre de 2010

D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación
Avenida José María Pino Suárez núm. 2
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06065, México, D.F.

Impreso en México
Printed in Mexico

Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio, sin autorización escrita de los titulares de los derechos.

El contenido de esta obra es responsabilidad exclusiva de cada uno de los colaboradores que participan en ella y no representa en forma alguna la opinión institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta obra estuvo a cargo de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos.

Su edición y diseño estuvieron al cuidado de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

qué este concepto desempeña múltiples funciones en el ordenamiento y explica por qué influencia de manera importante la construcción del derecho nacional y supranacional.

BIBLIOGRAFÍA. ARENO, A., "Diccionario de la Solidaridad", en *Cuadernos de Solidaridad*, núm. 2, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003; BALDWIN, P., *The Politics of Social Solidarity. Class Bases of the European Welfare State 1875-1975*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003; GIUFFRÈ, F., *La Solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2002; PALAZZO, A., "Gratuità e attuazione degli interessi", en PALAZZO, A. e S. MAZZARESE (ed.), *I contratti gratuiti*, UTET, Torino, 2008; ROBOTÀ, S., *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, Feltrinelli, 2006; SASSI, A., *Equità e interessi fondamentali nel diritto privato*, Università di Perugia, Perugia, 2006; STEJERNØ, S., *Solidarity in Europe. The History of an Idea*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005; VIDAL GIL, F. J., "Los derechos de solidaridad en el ordenamiento jurídico español", en *Cuadernos de Solidaridad*, núm. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

[ROBERTO CIPPITANI]

Suicidio

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, la voz suicidio es la formada, a semejanza de "homicidio", del latín *sui* —de sí mismo— y *caedere* —matar— significando la "acción y efecto de suicidarse", es decir, de "quitarse voluntariamente la vida".

Por tanto, el suicidio es el acto con el cual la persona se da muerte a sí misma, en otras palabras, la muerte propia deseada y ejecutada por un sujeto imputable o, en palabras de Durkheim, cualquier "caso de muerte que resulta, directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo, realizado por la misma víctima y con conocimiento por su parte de que se producirá este resultado". En la antigua Grecia, el suicidio se reputaba acto lícito conforme al profundo pesimismo che anima lo spirito greco, e che da un lato porta la sua gnómica a ripetere il motto secondo cui "per l'uomo il meglio è non esser mai nato, e se sia nato varcare al piu presto le porte dell'Ade", e dall'altro anima tutta la grande aspirazione orfico-pitagoricoplatonica ad un migliore aldilà, no obstante, la ulterior condena del suicidio che si manifesta poi nella morale cristiana, y, por consiguiente, en el derecho canónico será considerado delito in quanto con esso l'uomo viola il quinto comandamento del Decalogo, disponendo di un bene —la propria vita— che non gli appartiene, e del quale unico Signore è Dio. De ahí que, en el *Codex Iuris Canonici* se llegó a privar de sepultura eclesiástica coloro che si sono dati la morte con volontà deliberata.

Dice Caron, así como que en el propio *Digesto* (9, 2, 13) se recogiera: "nadie es señor de sus miembros, disposición ésta que no sólo priva a la persona de la facultad de poder disponer libremente de las partes de su cuerpo sino también y con mayor motivo de la vida por cuanto con ello se transmuta la misma esencia de la persona, puesto que de sujeto de derechos pasa a convertirse en una cosa mueble cual es el cadáver". En el

derecho histórico español se llegó a presumir que aquél que atentaba contra su propia vida —el suicida— había perdido el juicio y, por ende, no se le imponía sanción alguna aunque en la Ley 24, Tít. I, Part. 7a. se tipificaba el suicidio llevando aparejada la pena de "confiscación", sanción que ulteriormente se suprimió por el art. 10 de la Constitución de 1837. Y, es que como sostuvo Albert Camus: "no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio, porque resulta necesario para todo hombre resolver la cuestión del sentido de la vida y, correlativamente, si merece la pena seguir viviendo cuando ésta lo pierde". En consecuencia, el centro de este dilema habrá que buscarlo en si es posible y lícito —o no— la disponibilidad de la vida por su "titular", cohabitando en la actualidad las más heterogéneas opiniones al tratarse de una delicada cuestión en la que no resultan conciliables las distintas perspectivas vertidas, algunas difícilmente rebatibles, *prima facie*, por influencia de una determinada y exaltadora concepción de los derechos y libertades individuales (derivada de la *self determination* anglosajona) que, en ocasiones, parece desconectada del medio social y jurídico en que la persona misma se desenvuelve (*vid.* Socorro, *deber de*). La jurisprudencia apenas ha abordado esta materia al centrarse casi en exclusiva en la eventual responsabilidad civil —o, si se prefiere, "patrimonial"— de la administración (centros penitenciarios, hospitales, etc.), bajo cuya vigilancia se halla el suicida. La corriente que postula la "disponibilidad" de la propia vida (invocada en España, sobre

todo, por cierto sector de la doctrina penal calificado, a su vez, de "ultraliberal" por otros mismos penalistas) parece, en principio, irrefutable si únicamente se atiende al poder de disposición que, en su acepción subjetiva, el hipotético "derecho a la vida", pues así se reconoce en la inmensa mayoría de las constituciones entrañaría para "su titular".

Otra cosa es creer o querer que esa disponibilidad de la vida confiera a su "titular" un inexistente y malsano "derecho a la muerte" puesto que "la libertad, es decir, la facultad de hacer todo lo que no está prohibido, no constituye un derecho ni un haz de derechos" (Capitant), aunque se sostenga que resultaría innecesario recoger en un precepto que "cada uno puede disponer de su propia existencia física y espiritual" porque, en realidad, basta "con que materialmente pueda actuarse de hecho, siempre que jurídicamente no le esté vedado" (Thon). Sin embargo, el inconveniente de esta última teoría radica en que parece defender que "todo lo no prohibido es lícito", máxima que no se puede adoptar porque "¿de que no se castigue el suicidio frustrado, podría deducirse que el intento de suicidio era lícito?" (Díez Díaz), considerando que las facultades jurídicas de la persona sobre su propia vida se encuentran muy acotadas porque, aún pudiendo obrar en defensa de su vida "el ejercicio de las acciones para exigir la sanción penal y civil del responsable de su pérdida no está ya en sus manos. También las facultades de disposición sobre la propia vida quedan muy restringidas. Es cierto que no se sanciona el

suicidio ni el intento de suicidio y que lo penado es sólo la prestación de auxilio al suicidio... Pero en cambio, no está permitido contratar el darse muerte u obligarse a dejarse matar (por ejemplo, para experimentación médica), por ser la vida un bien fuera del comercio de los hombres" (De Castro y Bravo, y entre otros, art. 1825 C.C. mexicano; art. 1271 C.C. español; arts. 844 y 953 C.C. argentino; art. 2473 C.C. nicaragüense; art. 1464.1 C.C. chileno; y art. 210 C.C. boliviano), con lo que se deduce que la "situación de poder" en que consistiría, en su caso, la "vida" misma no adquiriría nunca la categoría de derecho subjetivo al no quedar su manejo y ejercicio a "discreción de su titular". A ello se podría agregar que con la mera contratación de un seguro para el caso de muerte o bien se reduce considerablemente la cobertura del riesgo de fallecimiento cuando ocurre por causa de suicidio o bien no se contempla temporalmente en tal supuesto (por todos, art. 4, 186 de la Ley mexicana de Contrato de Seguro de 1935 ("La empresa aseguradora estará obligada, aun en caso de suicidio del asegurado... si se verifica después de dos años de la celebración del contrato. Si el suicidio ocurre antes de los dos años, la empresa reembolsará únicamente la reserva matemática"), o el art. 93 de su homónima española de 1980 ("Salvo pacto en contrario, el riesgo de suicidio del asegurado quedará cubierto a partir del transcurso de un año del momento de la conclusión del contrato. A estos efectos se entiende por suicidio la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado"). En respuesta al anterior planteamiento de Camus, en el

ámbito filosófico y frente a la eventual "disponibilidad de la vida", cabría traer a colación la denominada "Teoría de la identidad personal" de Parfit, conforme con la cual es factible el mantenimiento de una política paternalista en el marco de una sociedad liberal. En efecto, de acuerdo con esta tesis la "identidad personal" supone una cuestión de grado, no una circunstancia que concurre o no de modo absoluto, puesto que depende de un encadenamiento corporal y psicológico a lo largo del tiempo. Ello tolera que, dada la conexidad entre memorias, intenciones, rasgos de carácter, etc., se puede ir disolviendo tal "identidad" durante la vida de una persona permitiendo hablar de distintos "yo" en desiguales instantes de su vida, de manera que la citada política paternalista se dirigiría a la salvaguarda del "yo futuro" del individuo frente a las actuaciones dañosas de su "yo presente", lo que significaría una prolongación de los principios que rigen las relaciones intersubjetivas y la restricción o traba de las posibilidades de acción del sujeto, postura que lejos de atentar al principio de autonomía estaría conectada con este último al dirigirse a maximizar tal autonomía de forma compatible con el principio de inviolabilidad personal. Por tanto, cuando el "yo presente" de la persona considere que con la disposición de la vida obtiene las cosas más elevadas de un ideal o proyecto personal, un eventual "yo futuro" —concretado por valoraciones, creencias, actitudes, etc.—, podría sentirse enormemente frustrado por la pérdida de ese bien. En consecuencia, para el supuesto de que se admitiese la disponibilidad de la vida hasta

tolerar el suicidio se estaría impidiendo el surgimiento de ese "yo futuro" pudiéndose concluir, con toda la problemática que le es inherente, que entonces se produciría un daño similar al del homicidio. Jurídicamente el suicidio constituye una conducta que se encuentra indirectamente censurada por el ordenamiento, lo cual se constata por la tipificación penal de la inducción o cooperación al mismo (arts. 312 y 313 C.P. mexicano; art. 143 C.P. español; art. 454 C.P. ecuatoriano; art. 393 C.P. chileno; y art. 107 C.P. colombiano) con la particularidad de que el suicidio no se halla proscrito ni, en consecuencia, penalizado. No se puede entender que los delitos de auxilio e inducción al suicidio sean actos ilícitos si no partimos de la base de que el mismo suicidio lo es, "lo que ocurre es que el suicidio mismo no tiene sanción penal por motivos de política criminal", pero no existe ningún "derecho al suicidio" porque chocaría frontalmente con las llamadas "buenas costumbres" (Ataz López), de lo contrario se habría de admitir "la paradoja de que el auxilio y la cooperación a la realización de un acto lícito son constitutivos de delito", por lo cual el auténtico motivo de la impunidad de la ilícita conducta del potencial "suicida" radicaría en el anhelo del legislador de no provocar en aquél —mediante la represión o castigo— el estímulo a reiterar su propósito de quitarse la vida una vez fracasado, en su caso, el primer intento, o sea, en la pretensión de evitar que aquellos que traten de suicidarse adopten todas las precauciones necesarias para hacerlo por temor a sobrevivir y, en consecuencia, recibir el castigo

legal a su conducta, no habiendo tampoco lugar a la sanción civil ya que aquél que atente contra su propia vida no puede exigirse una indemnización a sí mismo (Reverte Navarro). El "derecho a la vida", por definición, es irrenunciable e indisponible y —como argumentara el propio Kant— quien "destruye su vida para escapar de una situación desagradable toma a su persona como un mero medio, como si se tratara de una simple cosa", lo cual revela que el suicidio constituiría, a lo sumo, una conducta susceptible de tacharse de "indigna". Para Silva Sánchez se ha de arrancar de la concepción de que "toda vida tiene, por sí misma, una dimensión constitutiva del sujeto, de modo que la autonomía que dispone contra sí misma se autodestruye y debe rechazarse conforme al mismo principio de autonomía, es decir, en tanto que la vida es un valor en sí mismo, toda vida es digna de ser vivida. Esta concepción es la única compatible con la concepción del hombre como fin en sí mismo y, por lo demás, es la única que está en condiciones de evitar la introducción de un criterio gradualista en el bien jurídico "vida" que llevaría a distinguir entre sujetos con "más vida" y con "menos vida", con "mejor vida" y "peor vida", e, inevitablemente a instrumentalizar a los segundos en todos aquellos casos en que entraran en conflicto con los primeros. Una instrumentalización que se hace patente una y otra vez, aunque de modo no infrecuente se intente encubirla mediante la apelación pretendidamente "humanista" a los pretendidamente "razonables" intereses del sujeto instrumentalizado. Al margen

del aspecto subjetivo del figurado y así legislado "derecho a la vida", tampoco se puede obviar que el mismo posee una vertiente objetiva o social y, desde este punto de vista, resulta más razonable reconocer que el Estado jamás podría colaborar con la persona (administrado o ciudadano), ofreciéndole un fundamento en que basar la resolución de suprimir su propia vida, como tampoco sería sensato dejar de ampararle, aún en contra de su voluntad, en aras a la salvaguarda de su máspreciado bien. Desde esta perspectiva, la vida es materia de orden público y el correlativo deber de respeto a la persona que acompaña a la propia dignidad humana le autoimpone a ella misma el respeto a su propia vida. Precisamente ya apuntó Durkheim que el factor sociológico se alza como prevalente y determinante en la voluntad suicida, de modo que: *L'anomia e l'amorfismo della società contemporanea hanno un enorme peso sul fenomeno suicidiario, considerándose desde la vertiente médico-social que: il suicidio è un atto totale che racchiude motivazioni diverse e possiede una dinamica personale, sia pur condizionata, più o meno ampiamente da fattori sociali* (Palmieri). Por tanto, cabe concluir que la persona tiene el deber de conservar su vida porque, de sostener lo contrario, resulta evidente que si todos nos suicidáramos, si todos optáramos por acabar con nuestra propia vida, dejaría de existir la sociedad misma, el derecho y la propia especie humana. Valga reflexionar sobre los probables resultados prácticos de un hipotético "derecho al suicidio" (muy invocado por algunos autores anglosajones como Lawrence

Stevens que lo equipara, ni más ni menos, que a un "derecho civil"), imaginando a una persona, aquejada o no de enfermedad, que decide quitarse la vida por un motivo cualquiera (un desaire amoroso, la falta de trabajo, la ausencia o carencia de recursos económicos, etc.), de la forma más diversa, lanzándose al vacío desde un edificio de considerable altura, prendiéndose fuego como "bonzo" o ingiriendo alguna droga en cantidad letal, argumentando previamente, en su caso, que su vida carece de todo sentido e invocando el "derecho a disponer" de la misma con base en su dignidad y/o libertad personal. ¿Resultaría ello lícito o moral? ¿Es ése el significado que se le debe asignar a la libertad personal, a la autonomía individual? ¿Atentaría a su dignidad o al libre desarrollo de su personalidad el conato de salvarle? Elegir la respuesta negativa por cuanto la contraria responde a una concepción sumamente individualista, desmesuradamente personalista y nada solidaria, que instrumentaliza o cosifica la "vida" por quienes mantienen ser sus "titulares", además de contrariar, precisamente, el principio de autonomía individual (art. 1839 C.C. mexicano, o art. 1255 C.C. español). A ello hay que unir, desde la perspectiva jurídico-civil, que la interdicción del abuso del derecho (art. 7.2 C.C. español; art. II C.C. peruano; art. 107 C.C. boliviano; o en la esfera supranacional art. 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 17 del Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; o el art. 54 de la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea), permite igualmente rechazar la tesis de la "disponibilidad de la vida" en la medida que la misma comprenda el suicidio del individuo como acto lícito, esto es, la doctrina de prohibición del abuso del derecho, emanada del principio general de *bona fides*, implicaría aquella resistencia contra un exagerado individualismo libertario favoreciendo, al mismo tiempo, la solidaridad que simboliza, con Durkheim, el ideal moral (*vid.*, Sorcorro deber de). Cabría citar, por todos, a Valverde y Valverde (los derechos individuales "tienen sus limitaciones, y no pueden, por consiguiente, comprender el abuso del derecho, y estas limitaciones están impuestas por razones de orden moral y de interés público, por lo que se prohíbe el suicidio, la mutilación, la comercialidad del cadáver, que además de estar basadas en razones de moral y orden público, constituiría su ejercicio un abuso del derecho"); Ruggiero ("el suicidio constituye manifestación de abuso del derecho"); De Cupis ("Ma il diritto avente ad oggetto la vita non ricomprende la facoltà di abuso consistente nel potere di soppressione della vita stessa: quindi, il suicidio non costituisce atto di esercizio di un diritto") o, indirecta y recientemente, Silva Sánchez ("en realidad no debería hablarse de límites a la libertad de disposición sobre la vida, porque tal libertad de disposición no existe ni siquiera en abstracto").

De facto, aplicando la conocida doctrina del abuso del derecho al suicidio se advertiría la concurrencia de sus tres requisitos esenciales: A) Uso de un derecho objetivo y

externamente legal, que vendría representado por el ejercicio del abutente/suicida de su derecho "a disponer autónoma o libremente de la propia vida" como reverso del derecho a la vida constitucionalmente consagrado; habiéndose apuntado que el longevo principio relativo a que la actuación del derecho propio no desborda la esfera de la licitud carece de validez absoluta, tal y como sucede cuando el ejercicio es abusivo o antisocial pues el ámbito de ejercicio, actuación lícita, del derecho no se delimita únicamente por el conjunto de facultades otorgado al mismo, sino de la manera en que es ejercitado, lo cual implica la existencia de una norma general que delimita al mismo intrínsecamente. Como expresara la célebre STS de 14 de febrero de 1944, Sala de lo Civil, Castán Tobeñas, que se anticipó a la positivación de la doctrina del abuso del derecho en la ulterior reforma del Tit. Preliminar del C.C. español en 1974, respecto del axioma *qui iure suo utitur neminem laedit*, "no debe darse a esta máxima un alcance demasiado literal y absoluto, que la pondría en pugna con las exigencias éticas del Derecho reconocidas en todos los tiempos y que ni siquiera fueron extrañas al propio Derecho de Roma, en el cual los rigores del individualismo jurídico estuvieron templados por multitud de normas concretas que limitaban el absolutismo de los derechos objetivos" (Considerando 2o.); B) Un daño a situaciones que no están especialmente amparadas, como sería el daño, desprecio o destrucción, en este caso, de la propia vida por parte de "su titular", situación que no queda tutelada para el supuesto

de que el ataque provenga de la propia persona contra su vida misma, debiendo en todo caso atender a si el sujeto procede con intención de dañar, "traspasando los límites de la moral y de la equidad" y que, por tanto, el daño a tercero no se erige en requisito imprescindible puesto que "sirve solamente de presupuesto de responsabilidad, que obliga a indemnizar por la utilizada vía" de la exigencia de responsabilidad por infracción del vetusto *neminem laedere*. La antisocialidad es el motivo de que se obligue a reparar el daño causado, aun alegando que se ejercita un derecho, pero ello justifica también que se declare la nulidad del acto y se le prive de efectos aunque el daño a tercero no se haya producido y falte el presupuesto de indemnizar porque, en realidad, la tutela de la vida social exige el mantenimiento, y no sólo la reintegración, del interés lesionado (Roca Juan); y C) Inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada tanto subjetiva, por cuanto el derecho se ejercita con intención de exterminar o aniquilar la propia vida, como objetivamente, al provenir el daño del exceso o anormalidad en el ejercicio de ese "derecho sobre la vida propia", esto es, al no encontrar acomodo en su función social. Cabe reproducir nuevamente la referida STS de 1944 cuando apunta que "la doctrina moderna, en trance de revisar y, en cuanto sea necesario rectificar los conceptos jurídicos, impulsada por las nuevas necesidades de la vida práctica y por una sana tendencia de humanización del derecho civil, ha elaborado la teoría llamada del abuso del

derecho... que considera ilícito el ejercicio de los derechos cuando sea abusivo; y si bien existen discrepancias, teóricas y positivas, en orden a importantes puntos... lo cierto e innegable, de todos modos, que tales dudas o divergencias no pueden borrar la conformidad sustancial del pensamiento jurídico moderno en torno a la idea de que los derechos subjetivos, aparte de sus límites legales, con frecuencia defectuosamente precisados, tienen otros de orden moral, teleológico y social, y que incurre en responsabilidad el que, obrando al amparo de una legalidad externa y de un aparente ejercicio de su derecho, traspasa en realidad los linderos impuestos al mismo por la equidad y la buena fe, con daño para terceros o para la sociedad" (Considerando 3o.). Por tanto, en apretado resumen, cabría aplicar la doctrina de la prohibición del abuso del derecho, como institución de equidad cuando la persona alegue ejercitar su "derecho a la vida" con la intención decidida de destruirse (incluso de causar un hipotético daño a otros por motivo de su fallecimiento), o lo utilice de modo anormal y contradictorio respecto de la armónica convivencia social, requiriendo su apreciación que el supuesto de hecho revele las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo). El suicidio, por ende, no dejaría de constituir un comportamiento anormal y antisocial que excede manifiestamente los límites del "derecho a la vida", los cuales no precisan hallarse delimitados normativamente,

implicando, en esencia, un ejercicio abusivo e inadmisibles de aquél "derecho" al suponer una facultad que la ley no concede al suicida por franquear los límites impuestos al mismo por la equidad y la buena fe.

BIBLIOGRAFÍA. ATAZ LÓPEZ, J., *Los médicos y la responsabilidad civil*, Madrid, 1985; CARON, P. G., *Suicidio (Diritto canonico)*, "Novissimo Digesto Italiano" (diretto da Azara, A./ Eula, E.), T. XVIII, Torino, 1971; DE CASTRO y BRAVO, F. *Temas de Derecho Civil*, Madrid, 1976; DE CUPIS, A., "I diritti della personalità", en *Trattato di Diritto Civile e Commerciale* (già diretto da Cicu, A., y Messineo, F., continuato da Mengoni, L.), vol. IV, 2a., Milano, 1982; DE LAS HERAS GARCÍA, M. A., *Estatuto ético-jurídico de la profesión médica*, T. I, Madrid, 2005; PALMIERI, V. M., "Suicidio (Medicina legale)", en "Novissimo Digesto Italiano" (diretto da Azara, A./ Eula, E.), T. XVIII, Torino, 1971; REVERTE NAVARRO, A., "La limitación del esfuerzo terapéutico y la responsabilidad del médico", en *Bioética y Medicina Intensiva* (Gómez Rubí, J. A./ Abizanda Campos, R., coords.), Barcelona, 1998; ROCA JUAN, J., "Artículo 7.2", en *Comentarios a las reformas del Código Civil. El nuevo Título Preliminar del Código y la Ley de 2 de mayo de 1975*, vol. I, Madrid, 1977; SILVA SÁNCHEZ, J. M., *Los 12 documentos de instrucciones previas de los pacientes (artículo 11.1 Ley 41/2002) en el contexto del debate sobre la (in)disponibilidad de la vida*, La ley, no. 5840, 2003.

[MANUEL ÁNGEL DE LAS HERAS GARCÍA]

Suprema Corte de Justicia de la Nación

I. CONCEPTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es el órgano jurisdiccional al que la Constitución Federal atribuye las simultáneas calidades de Máximo Tribunal del Poder Judicial de la Federación, último intérprete de la propia Constitución y Tribunal Supremo para la interpretación de las leyes del país.

De acuerdo con la Constitución, en términos generales, el *status* jurídico de tribunal de máxima instancia judicial de la Federación que posee la SCJN tiene una excepción: la función jurisdiccional especializada que ostenta el Tribunal Electoral (artículo 99). En materia de gobierno y administración del Poder Judicial Federal, que corresponde al Consejo de la Judicatura (artículo 100), la SCJN tiene en la actualidad una excepcional pero definitiva actuación. En cuanto Tribunal que en exclusiva o en última instancia ejerce jurisdicción constitucional, se ubica en la cúspide de los tribunales federales. Por último, bajo determinadas condiciones procesales, actúa como órgano de última instancia en la aplicación judicial del ordenamiento jurídico, razón por la cual es también el Tribunal Supremo para la unificación de la interpretación del derecho mexicano.

II. HISTORIA. A semejanza del paradigma constitucional estadounidense, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 4 de octubre de 1824, estableció que el Poder Judicial de la Federación residía en una Corte Suprema de Justicia,